



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

En la ciudad de Medellín, a los cuatro (04) días de septiembre de dos mil veintitrés
(2023)

DEMANDANTE:	Luis Fernando Loaiza Restrepo
DEMANDADOS:	Tax Andaluz
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
Radicado	05001-31-05-022-2022-00088-01 (088)05001310502220220008801

En la fecha, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante señor **Luis Fernando Loaiza Restrepo**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín. en el proceso ordinario laboral que le sigue a la empresa **Tax Andaluz**

Una vez agotado el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala acoge el proyecto de la ponente que se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

El señor Luis Fernando Loaiza Restrepo formuló demanda ordinaria laboral, y como pretensiones señaló:

PRIMERA: Se DECLARE que, el señor LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO, fue empleado de la empresa TAX – ANDALUZ., Identificada con el número de Nit: 890902798-9 en las fechas 01 de mayo de 2016 hasta el 4 de agosto de 2021. Quien fue su empleador hasta el día de su despido injusto por parte de la empresa TAX – ANDALUZ. Y fue ilegalmente e injustificadamente despedido.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la empresa TAX – ANDALUZ., (...). al pago de salarios y prestaciones sociales desde 4 de agosto de 2021 y hasta su otorgamiento de pensión ya que fue despedido con estabilidad laboral reforzada en calidad de pre pensionado y aunque presentó tutela para que el juez le protegiera sus derechos fundamentales, no fue posible dada la tutela tan deficiente que le presento un amigo donde no manifestó que él dependía económicamente del salario que devengaba en la empresa TAX – ANDALUZ para su mínimo vital y el de su grupo familiar, se considera esta pretensión hasta que el señor se encuentre en la nómina de pensionados de COLPENSIONES, en un valor aproximado en TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MIL(sic) PESOS (\$39.317.390).

TERCERA: Se CONDENE a la empresa al TAX – ANDALUZ., a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO, los siguientes conceptos causados en un contrato de trabajo: Salarios insolutos, Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones, seguridad social y así como la indemnización por mora consagrada en el artículo 65 del C.S.T. Y S.S.

CUARTA: Se CONDENE a la empresa TAX – ANDALUZ, a reconocer y pagar al LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO, la indemnización Ley 361 de 1997, que equivale al pago de seis meses de salario.

QUINTA: Se CONDENE a la empresa LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO. Al RECONOCIMIENTO Y PAGO de las costas y agencias en derecho.

La demanda se sometió a las formalidades de reparto, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, quien mediante proveído de diciembre 7 de 2022 dispuso su devolución al demandante para que subsanara las falencias que relacionó de la siguiente manera:

1. Deberá aclarar el numeral tercero de los hechos, en cuanto a la fecha de terminación, puesto que afirma haber terminado la relación en 2001 y en otros apartes indica que fue en 2021, máxime cuando indica que inició labores en 2016.
2. Deberá indicar cuál fue el último salario devengado y último lugar de prestación del servicio (municipio y/o ciudad). Siendo determinante conocer el lugar de prestación de servicios para establecer competencia. (Artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). Toda vez que en el acápite de competencia la determina por el último lugar de prestación del servicio, sin indicar el mismo.
3. Deberá indicar en la pretensión tercera cuales son los periodos que pretende por concepto de Salarios insolutos, Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones y seguridad social.
4. La demanda no cumple con el requisito contenido en el Numeral 8º del Artículo 25 del C.P.T y de la S.S modificado por el Artículo 12 de la Ley 712 de 2001, toda vez que la misma tiene fundamentos de derecho, pero carece de RAZONES DE DERECHO. En este orden de ideas, deberá la parte demandante indicar los fundamentos legales para solicitar cada una de las pretensiones de la demanda, e igualmente las razones de derecho del porque es procedente dichas peticiones.
5. Deberá indicar los fundamentos facticos que soportan la pretensión cuarta (4ª), toda vez que la Ley 361 de 1997 es por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación.
6. Expresará claramente a que concepto corresponde el valor de \$39.317.390, enunciado en la pretensión segunda.
7. Deberá indicar si conforme las pretensiones enunciadas en los numerales segundo (2º) y tercero (3º) se pretende el reintegro.
8. Modificará las pretensiones, de tal forma que no se presente una indebida acumulación entre sí, en relación a las peticiones 2ª y 3ª parcial con parte de la 3ª, en cuanto a la “indemnización por mora consagrada en el artículo 65 del C.S.T. Y S.S., y

estableciendo de ser necesario pretensiones principales y subsidiarias, en debida forma, o excluyendo alguna de ellas, para evitar el desfase jurídico que ello representaría. (archivo 005InadmiteDemanda).

Resultado de la solicitud elevada por el juzgado, la parte actora, a través de su apoderada, allegó memorial subsanación, pero el juez decidió rechazarla por cuanto, a pesar de ella subsistió el defecto referente a la indebida acumulación entre las pretensiones 2 y 3, al no haberse corregido esta falencia de la demanda (archivo 007AutoRechazaDemanda). Decisión que fue materia de reposición y en subsidio apelación.

Al resolver el recurso horizontal, la primera instancia no atendió los razonamientos del actor, destacó que la demanda incorporara como pretensiones principales las de reintegro e indemnización por mora del artículo 65 CPTSS, debido a esto solicitó la corrección, pero al no hacerlo procedía el rechazo porque las pretensiones de reintegro, y que la terminación se declare ineficaz, no pueden coexistir como principales, pues la primera permite que el contrato continúe vigente y la segunda implica que finalizó, sin que el juzgado pueda escoger entre cuál de ellas analizará en forma principal o subsidiariamente. En consecuencia, concedió la apelación (archivo 009Resuelve recurso de reposición).

II. RAZONES DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada del demandante en su censura expresó textualmente:

- “- Si bien es cierto que, el Despacho en su auto inadmisorio solicita pretensiones principales y subsidiarias, también advierte como una posibilidad y no como un fin como requisito para la admisión de la demanda,
- Igualmente se le manifiesta al Despacho que, la sanción del artículo 65 del código sustantivo del trabajo no se excluye con la solicitud de reintegro dado que la sanción solicitada es por la injusta e ilegal terminación del contrato de trabajo.
- Adicionalmente se le manifiesta al señor Juez que después de un año de estar en el proceso en el Juzgado a la espera de trámite por el Despacho, se están violando los derechos de mi representado dado los términos en el derecho laboral.” (archivo 008RecuroReposiciónSubsidioApela, Subrayas fuera del texto).

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 PROBLEMA JURÍDICO

En virtud de los argumentos expuestos en el recurso, y considerando que el estudio del plenario en la segunda instancia se limita única y exclusivamente al punto de censura enrostrado por el apelante al proveído impugnado, según lo dispone el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado por la Ley 712 de 2001, la Sala se ocupará de establecer si la primera instancia acertó o no al no reponer el auto que rechazó la demanda ante la indebida clasificación de las pretensiones.

4.2 PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DEL RECURSO

Tenemos que hay legitimación en la parte que recurre porque con la decisión atacada hay mengua en sus intereses, el recurso es tempestivo, está cumplida la carga procesal de la sustentación y la providencia es susceptible de apelación.

4.3 PREMISAS NORMATIVAS

En el caso bajo estudio encuentra el despacho que el auto objeto de apelación rechazó la demanda por falta de subsanación de los defectos señalados en la providencia que ordenó la devolución, debido a que la parte activa solicitó las pretensiones de indemnización por sanción moratoria del artículo 65 CST y de reintegro como principales, cuando ellas son excluyentes entre sí.

Es sabido que el juez como director del proceso debe procurar el debido proceso, definido en sede constitucional como el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional o administrativa, sentencia C-214-1994.

Por su parte el estatuto procesal laboral consagra en el artículo 25 los requisitos de la demanda, y son los que a continuación se enlistan:

1. La designación del juez a quien se dirige.
2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas.
3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda.
4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
5. La indicación de la clase de proceso.
6. **Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.**
7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.
8. Los fundamentos y razones de derecho.

9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y
 10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia.
- Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo". (Negrilla fuera del texto).

En caso de que la demanda no cumpla con esos requisitos, el artículo 28 ibidem, faculta al juez a devolverla para que la parte activa la subsane en el término de 5 días, con el propósito de no truncar el efectivo cumplimiento del debido proceso y evitar futuras nulidades o excepciones que no permitan tomar una decisión de fondo; en consonancia con las disposiciones contenidas en el artículo 11 del CGP aplicable por analogía del artículo 145 del CPTSS, que señala: «*Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. ...El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias*».

Por su parte, el artículo 25A ibidem, contempla que el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:

- ...1. Que el juez sea competente para conocer de todas.
- 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.**
3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado.

Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa...". (Negrilla fuera del texto).

El artículo 100 ibidem enlista las excepciones previas, dentro de las cuales se encuentra la del numeral 5 denominada: *Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones*. Normatividad que al revisarse en armonía con el artículo 88 del mismo estatuto procesal general, éste anota que es posible la acumulación de varias pretensiones siempre y cuando se encuentren ajustadas a los lineamientos ahí descritos, como el del numeral 2. *Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias*.

4.4 CASO CONCRETO

En este contexto, se entiende que, al abordarse en sede de apelación el auto que rechazó la demanda, se permite el estudio del que negó la admisión para calificar que no se haya incurrido en exceso de ritual manifiesto. Por lo tanto, es a partir de la providencia que ordenó la devolución de la demanda, en la que el juez delimitó los defectos que la parte demandante debía corregir, con la cual se analizará la viabilidad o no de su revocatoria, en lo que interesa al recurso, en ella se dijo:

“1. Deberá aclarar el numeral tercero de los hechos, en cuanto a la fecha de terminación, puesto que afirma haber terminado la relación en 2001 y en otros apartes indica que fue en 2021, máxime cuando indica que inició labores en 2016.

2. Deberá indicar cuál fue el último salario devengado y último lugar de prestación del servicio (municipio y/o ciudad). Siendo determinante conocer el lugar de prestación de servicios para establecer competencia. (Artículo 5º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social). Toda vez que en el acápite de competencia la determina por el último lugar de prestación del servicio, sin indicar el mismo.

...”

3. Deberá indicar en la pretensión tercera cuales son los periodos que pretende por concepto de Salarios insolutos, Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones y seguridad social.

...

6. Expresará claramente a que concepto corresponde el valor de \$39.317.390, enunciado en la pretensión segunda.

7. Deberá indicar si conforme las pretensiones enunciadas en los numerales segundo (2) y tercero (3º) se pretende el reintegro.

8. Modificará las pretensiones, de tal forma que no se presente una indebida acumulación entre sí, en relación a las peticiones 2ª y 3ª parcial con parte de la 3ª, en cuanto a la *“indemnización por mora consagrada en el artículo 65 del C.S.T. Y S.S., y estableciendo de ser necesario pretensiones principales y subsidiarias, en debida forma, o excluyendo alguna de ellas, para evitar el desfase jurídico que ello representaría.*

De su lectura se sigue que esas consideraciones no constituyen un exceso de ritualidad, sino aspectos de forma que debían subsanarse y/o aclararse oportunamente (como el del numeral 7); sin embargo, el apoderado del demandante no hizo todas las modificaciones necesarias lo que conllevó a su rechazo.

Sin duda, el juez como director del proceso puede y debe exigir, previo a la admisión de la demanda, el cumplimiento de los requisitos legales lo cual tiene incidencia en la satisfacción de los presupuestos procesales encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo; y en la misma línea, tiene el deber de interpretar la demanda,

tal como tiene señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en Sentencia SL1910-2019:

[...] los jueces tienen el deber de interpretar la demanda sin que los fundamentos jurídicos expresados por el actor los restrinja en su labor, porque lo que delimita la causa petendi no son las razones de derecho invocadas en la demanda, las cuales, incluso, pueden no coincidir con lo que el funcionario judicial considere que es el derecho aplicable al caso, sino la cuestión de hecho sometida a escrutinio de la jurisdicción...

En este caso se le ordenó al demandante precisar respecto de las pretensiones segunda y tercera, cuál presentaba como principal y subsidiaria, e indicar de conformidad con las pretensiones de los numerales 2° y 3°, si pretendía el reintegro; ante ello en el escrito de subsanación expresó:

(...) 9 Con fundamento en los hechos que preceden, solicitó se profieran las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Se DECLARE que, el señor LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO, fue empleado de la empresa TAX – ANDALUZ., Identificada con el número de Nit:(...) en las fechas 01 de mayo de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2021. Quien fue su empleador hasta el día de su despido injusto por parte de la empresa TAX – ANDALUZ. Y fue ilegalmente e injustificadamente despedido.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la empresa TAX – ANDALUZ., Identificada con el número de Nit: 890902798-9. Al pago de salarios y prestaciones sociales desde 6 de septiembre de 2021 y hasta su otorgamiento de pensión ya que fue despedido con estabilidad laboral reforzada en calidad de pre pensionado y aun que presento tutela para que el juez le protegiera sus derechos fundamentales, no fue posible dada la tutela tan deficiente que le presento un amigo donde no manifestó que él dependía económicamente del salario que devengaba en la empresa TAX – ANDALUZ para su mínimo vital y el de su grupo familiar, se considera esta pretensión hasta que el señor se encuentre en la nómina de pensionados de COLPENSIONES, en un valor aproximado en TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$39.317.390) que corresponde a:

Salarios insolutos: septiembre 6 de 2021 a diciembre de 2021 \$3.634.104
Prestaciones sociales de septiembre 6 de 2021 a diciembre de 2021 \$ 1.400.000
Pago a la seguridad social de septiembre 6 de 2021 a diciembre de 2021 \$1.200.000
Salarios insolutos de enero de 2022 a diciembre 2022: \$12.000.000
Prestaciones sociales de enero de 2022 a diciembre de 2022 \$ 2.622.000
Pago a la seguridad social de enero de 2022 a diciembre 2022: \$ 3.792.000
Indemnizaciones aproximadas desde el 6 de septiembre de 2021 y hasta que se profiera la sentencia: \$ 14.669.286.

TERCERA: Se CONDENE a la empresa al TAX – ANDALUZ., a reconocer y pagar al señor LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO, los siguientes conceptos causados en un contrato de trabajo desde la terminación injusta e ilegal el pasado 6 de septiembre de 2021 y hasta la fecha que se profiera sentencia favorable: Salarios insolutos, Cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, vacaciones, seguridad social y así como la indemnización por mora consagrada en el artículo 65 del C.S.T. Y S.S.

CUARTA: Se le ordene a la empresa TAX – ANDALUZ, a reintegrar a laborar al señor LUIS FERNANDO LOAIZA RESTREPO hasta que se encuentre en la nómina de pensionados del fondo de pensiones donde se encuentra afiliado el demandante.

(...)." (Negrilla fuera del texto).

El extremo activo dejó en claro en el escrito de subsanación, que con la demanda reclamaba la indemnización moratoria del artículo 65 del CST y **el reintegro**. Sin que se indicara que era de manera subsidiaria; lo que trajo consigo que el juez dispusiera el rechazo de la demanda bajo las siguientes consideraciones:

...Y es que, si bien la parte actora modificó parte de las referidas pretensiones, persiste la indebida acumulación percibida desde el auto admisorio clasificado en principales y subsidiarias tal como se solicitó en el auto del 07 de diciembre de 2022 que exigió requisitos. Lo anterior, toda vez que en la demanda aportada con la cual se pretende subsanar y que obra en archivo 006 del expediente digital, en la pretensión tercera se pretende la sanción del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual es la sanción originada con la terminación del contrato de trabajo y en la pretensión el reintegro.”

Valorados los reproches de la parte recurrente, se entra a revisar si el demandante subsanó las falencias de la demanda, y si la omisión de indicar que las pretensiones de reintegro y sanción moratoria del artículo 65 del CPT, las formulaba ambas como principales o una subsidiaria de la otra, configuran un defecto grave que torne inepta la demanda por carecer de los requisitos formales, como lo entendió el juzgador de primer grado, o si es al Juez a quien le corresponde dirimir el problema que surge de la indebida acumulación de pretensiones, con el propósito de evitar que se deje en suspenso la materialización de los derechos sustanciales que se quieren proteger cuando se accede al servicio de la justicia.

Es postura de nuestro órgano de cierre que, en casos como el que se examina, en los que las pretensiones de la demanda están envueltas en un manto de vaguedad que las hace ininteligibles, debe el juez asegurarse de leer la demanda, acudiendo al alcance que le permita establecer la intención que ofrezca mejores resultados interpretativos, de manera que solo cuando el defecto es grave, trascendente, y no cualquier informalidad superable, procederá a devolverla o a rechazarla como último recurso para proteger bienes jurídicos superiores, dicho en otras palabras, el juzgador debe intervenir con el fin de que no se sacrifique el derecho sustancial ante la exigencia de las formalidades, como se adoctrinó en la SL 3681 de 2021 cuyos apartes se traen a colación así:

En tal contexto, dijo la Corte, que era deber de los operadores judiciales intervenir en cada etapa del proceso a fin de corregir las inconsistencias que se presenten, lo que se hace a través de los siguientes mecanismos:

i) la «*Devolución y reforma de la demanda*» del artículo 28 del CPTSS, que le impone al juzgador el deber ineludible de revisar cuidadosamente que la demanda se ajuste a lo contemplado en la ley adjetiva y, de no ser así, ordenar su devolución para que se corrijan las deficiencias a que haya lugar.

ii) la facultad de reforma a la demanda del inciso segundo del artículo 28, *ib*, en el que a pesar de que es la parte reclamante la que juega un papel decisivo, debe ir acompañada del control y verificación del juez.

iii) la contestación a la demanda y su reforma, en la que la parte demandada, en el marco de los principios de claridad y lealtad, debe advertir las irregularidades o deficiencias que presente la demanda, a través de la proposición de la excepción previa de inepta demanda o, para el caso, de indebida acumulación de pretensiones, evento en el que también le corresponde al juez ejercer un control de esa pieza procesal para señalar las inconsistencias o el incumplimiento de los presupuestos de la norma procesal.

iv) la participación activa en la audiencia del artículo 77 del CPTSS, pues el operador judicial *«debe estar preparado y tener pleno conocimiento de los supuestos fácticos, pretensiones, excepciones [...] para precaver vicios de procedimiento y decisiones inhibitorias»*, ya que en ese momento se define el marco litigioso de las partes, que debe ser identificado con claridad y precisión.

Ahora, en punto del tema examinado, en la providencia CSJ SL532-2013, que reitera la regla de las CSJ SL, 14 feb. 2005, rad. 22923; CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 30744; CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 35955 y CSJ SL, 24 may. 2011, rad. 37803, la Corte afirmó que corresponde al juez desentrañar el eventual problema procesal derivado de la indebida acumulación de pretensiones y evitar dictar una sentencia inhibitoria, pues esta deviene en un pronunciamiento formal, que deja *«en suspenso la materialización del derecho sustancial e impiden que los asociados conozcan la decisión definitiva de su conflicto jurídico que es, precisamente, lo que buscan cuando acceden al servicio de justicia»*.

De tales premisas se puede colegir que, aunque el demandante no expresó, respecto de las pretensiones de reintegro y la sanción moratoria del artículo 65 CST, cuál solicitaba en forma principal y subsidiaria, lo cierto es que, dentro del escenario procesal, el juez cuenta con varios momentos para ejercer mecanismos de control e interpretación de la demanda, con el fin de no hacer nugatorio el acceso a la administración de justicia ni atentar contra sus fines, verbigracia, en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, como lo permite el artículo 77 del CPTSS en su parágrafo 1, donde podrá, con la intervención de las partes, precisar la finalidad de las pretensiones, e inclusive, en la diligencia del artículo 80 del CPTT podría estudiar en primer lugar la que corresponde al querer principal de la parte y de hallarse procedente, abstenerse de analizar aquella que contenga la intención subsidiaria.

En apariencia, las pretensiones de reintegro e indemnización moratoria del artículo 65 del CST son excluyentes entre sí, pero si se observa detalladamente, podrá concluirse que ellas presentan naturaleza diferente, pues mientras la primera hace referencia a la reubicación laboral, la segunda alude a indemnizaciones que no son más que un tipo de compensación generada por la falta de pago de salarios y prestaciones sociales una vez finaliza el contrato de trabajo, y aunque a primera vista parecieran incompatibles, corresponden a aquellos eventos en que el juez debe realizar una interpretación racional y conjunta de la demanda, con el propósito de aclarar la verdadera intención del actor.

Debe examinarse que la indebida acumulación de pretensiones, que hace inepta la demanda, se da **cuando las pretensiones se excluyen entre sí o la una es negación de la otra**, en el presente caso, para el evento de que se reconozca el reintegro solicitado, el decidir sobre los pagos de los salarios, prestaciones y vacaciones causadas, no se excluye con la indemnización moratoria con respecto a esas sumas, dado que su naturaleza es consecuencial o subsidiaria, lo que significa que pueden o no reconocerse, pero es necesario examinarlas en forma separada para determinar su procedencia o no. Por lo tanto, no se está ante la circunstancia que sitúa al juzgador en imposibilidad absoluta de decidir.

Según lo expuesto, nada impide al juez, dentro de la oportunidad pertinente puede adentrarse al estudio de las pretensiones del actor y evaluar la procedencia o no del reintegro perseguido, para determinar la factibilidad de acceder o la indemnización reclamada. Tal proceder resultaba absolutamente lógico y acorde con los deberes del a quo.

Esta postura corresponde con el precedente vertido por esta sala en la providencia proferida el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), al resolver la apelación del auto en el expediente expediente 05001-31-05-007-2017-00997-02, bajo estos considerandos no es admisible la postura del juzgador de primer grado, en cuanto rechazó la demanda, luego de tomarse cerca de un año para realizar el proceso de calificación inicial, sacrificando el derecho sustancial y ofreciéndole prevalencia a las formalidades.

La Sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia también ha abordado el tema de los límites del juzgador para analizar e interpretar la demanda, recordando la prevalencia que debe imperar frente al derecho sustancial, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL762 de 2023, MP Omar Restrepo, señaló:

Tiene establecido esta Corte que es deber del juez interpretar la demanda, desentrañar su genuino sentido y resolver de fondo la controversia puesta a su consideración, así como evaluar todas las opciones cuando están de por medio reglas y derechos de rango constitucional que garantizan el acceso a la seguridad social y, en particular, a la pensión de una persona en condición de discapacidad, que podrían verse afectados y que, al fungir como tribunal de instancia, no podía soslayar a través de la mera aplicación de las normas procesales, que, además, están diseñadas para proteger el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.

Así, lo ha dicho, entre otras, en la sentencia CSJ SL3681-2020:

En efecto, en la sentencia CSJ SL1823-2018, la Sala resaltó que la administración de justicia, como eje primordial de la democracia, tiene por objetivo hacer efectivos los derechos, garantías y libertades consignados en la CN y en la ley, razón por la cual estas dotaron a «los

servidores judiciales de múltiples mecanismos que les permitan llevar a cabo la noble misión de definir los conflictos sometidos a su competencia, con la mayor celeridad, transparencia y eficacia posibles».

De ahí, que «el juez laboral está llamado a acatar sin perder de vista la trascendencia social de sus sentencias, ni soslayar tampoco el principio constitucional consignado en el canon 228 de la Carta, según el cual, las formalidades no pueden prevalecer sobre el derecho sustancial», para lo cual es su deber indagar el querer de las partes y, de ser necesario, interpretar las piezas procesales para resolver el litigio que allí se plantea.

Además, en la sentencia CSJ SL9318-2016, la Sala estudió la facultad de dirección del juez laboral y de seguridad social y su efectiva intervención en un proceso que está conformado por actuaciones regladas, que tienen por finalidad garantizar los derechos constitucionales al debido proceso, contradicción y defensa, así como el de los usuarios a recibir una pronta y eficaz administración de justicia, según se afirmó en la «exposición de motivos del proyecto de Ley 044 de 2006, Cámara, por la cual se buscaba reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social».

Corolario de expuesto, no hay transgresión legal cuando el Juez hace uso de su facultad de interpretación de la demanda para resolver las pretensiones excluyentes que se acumularon indebidamente, pues se trata de su deber ineludible de aprehender el querer de las partes y definir el litigio en el marco probatorio del proceso laboral, pues los asuntos que son materia de esta clase de controversias *«gozan de protección preeminente, al punto que el “Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (artículo 9° C.S.T.); ello traduce en que los jueces están convocados a materializar tales aspiraciones, a través de una sentencia definitiva»* (SL 580 de 2013, citada en SL 9318 de 2016 y SL 3352 de 2019).

Por consiguiente, existe mérito para revocar la decisión de primer grado consignada en el auto proferido el 14 de febrero de 2023, en cuanto, rechazó la demanda por falta de subsanación de los defectos de que adolecía; para en su lugar, ordenar la admisión y la continuidad del trámite bajo los parámetros aquí examinados.

Sin costas en esta instancia, por haber prosperado el recurso.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 14 de febrero de 2023, dentro del proceso ordinario laboral

promovido por el señor **Luis Fernando Loaiza Restrepo** en contra de **Tax Andaluz**, y en su lugar se ordena:

- ADMITIR la demanda presentada por el señor Luis Fernando Loaiza Restrepo para tramitar el proceso ordinario laboral de primera instancia; por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Sin costas en segunda instancia por haber prosperado el recurso.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Las magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 155 del 6 de
septiembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>